

Políticas del gobierno sobre Organismos Genéticamente Modificados (OGM)

Ing. Agr. Enzo Benech ¹

En el Uruguay el nuevo marco legal para la introducción y uso de Organismos Genéticamente Modificados es al mismo tiempo flexible, serio y útil a los intereses de todos los ciudadanos. Admitiendo la controversia sobre el tema, la nueva normativa fue el resultado de un proceso fundamentado de estudio de las posibilidades del país y de su inserción internacional.

Desde hace muchos años la humanidad maneja vegetales y animales adaptándolos a sus necesidades y para esto ha domesticado especies, realizado mejoramiento genético, manipulado genes y condiciones de producción.

El avance de la ciencia y la tecnología es innegable y la velocidad con la cual se generan los cambios adquiere ritmos vertiginosos, es así que la biotecnología moderna esta ocupando un lugar cada vez más importante en la actividad productiva de los países.

Ella es sin duda una herramienta con alto potencial, capaz de combinar material genético de distintas especies para lograr objetivos específicos. Como toda herramienta, el uso que se le da depende del usuario y no de la herramienta.

En este caso, son necesarias fuertes inversiones para desarrollar estos proyectos y éstas están protegidas por la propiedad intelectual que protege el desarrollo de las innovaciones. La globalización tecnológica y de las comunicaciones en el mundo que vivimos hace que este sea cada vez más chico e interdependiente.

En este marco global no podemos ignorar el tamaño de nuestra economía al momento de definir el rol que en él jugamos y el que queremos jugar; sin duda somos proveedores de alimentos, productores de *commodities*. Todos quisiéramos producir y exportar tecnología y ponerle a nuestros productos más valor agregado y alta calidad que le de mayor bienestar a nuestra población.

Así es que el gobierno debe manejarse con la defensa de los intereses de nuestros ciudadanos, sin aislarse de un mundo global y tratando de que las condiciones de vida sean cada vez mejores para todos los uruguayos.

¹ *Presidente del INASE.*

Si bien cuando nos referimos a OGMs normalmente pensamos en plantas, el tema es mucho más amplio ya que existen en nuestro país y en todo el mundo, medicamentos, microorganismos, animales, materias primas para las industrias, e infinidad de otros productos que tienen sus orígenes en la manipulación de genes entre especies de los cuales podemos no conocer ni tener en cuenta.

Los aspectos que se consideran importante en el nuevo marco regulatorio son la incidencia en la salud humana, los relativos al ambiente y al cuidado de la biodiversidad, los relacionados a los acuerdos internacionales de negocios y los socioeconómicos.

Como en varios órdenes de la vida, aquí y en todo el mundo, algunos apoyan estas nuevas tecnologías y otros son sus detractores.

Nuevo marco legal

El Gobierno asumió la obligación de legislar al respecto y el desafío de dotar a la decisión de racionalidad. Es así que en acuerdo de gobierno, se decidió por decreto (N° 037/007) una moratoria de 18 meses para estudiar el tema, con el compromiso de fijar una opinión y trabajar en ese sentido.

Ese decreto dio lugar al Grupo Interministerial, conformado por un delegado y sus alternos de los Ministerios de agricultura (MGAP), economía (MEF), salud (MSP) y medioambiente (MVOTMA), el que propuso las normas finalmente aprobadas, el decreto N° 353/008 del 21 de julio de 2008.

El decreto 353/008 es el inicio de un proceso orientado a dar un marco legal para todos los OGM, estableciendo un plazo de un año para la elaboración de un proyecto de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

En este Decreto, se definió que Uruguay considera posible el uso de transgénicos vegetales y genera un marco de coexistencia basado en el estudio caso a caso para definir si se pueden utilizar, con qué objetivo y en qué condiciones.

El estudio caso a caso seguirá un protocolo, el que será elaborado por la Evaluación del Riesgo en Bioseguridad (ERB). La Evaluación de Riesgos establece el análisis de estudios técnico-científicos al mayor nivel posible con el propósito de asegurar que el nivel de riesgo asumido sea aceptable y establezca las condiciones bajo las que se deberían usarse o no y con qué fin.

Luego del estudio técnico-científico en aspectos de salud y ambiente, la definición la tomarán los Ministros. Éstos, a través de un grupo de asesores que integran la Comisión para la Gestión del Riesgo (CGR), además del informe de la ERB tomarán en cuenta el clima de negocios, las condiciones y mercados con los

cuales el país está trabajando teniendo en cuenta las políticas de nuestros clientes de forma que no se generen limitaciones al comercio.

La coexistencia y el estudio caso a caso, es el camino más difícil y más costoso, respecto a una política de libre uso sin regulación o la prohibición total. Pero es, a juicio del Gobierno el camino posible para darle el marco de seriedad y seguridad que este polémico tema necesita. Así establece el compromiso de que se respeten los derechos de todos los ciudadanos y el marco en el cual deben moverse los interesados.

Las instancias de participación

Una consideración especial merece la interacción entre las autoridades que van tomando decisiones y la ciudadanía en general. En el nuevo Decreto hay tres niveles al respecto.

En el procedimiento caso a caso de solicitud de autorizaciones, hay una primera instancia de *información* a la población sobre todo nuevo evento transgénico que se esté solicitando al país y para que usos. En esta fase se utilizarán todos los medios posibles, informáticos, prensa, y todas las formas que permitan hacer llegar a la población esta información.

En una segunda instancia, luego de realizada la evaluación de riesgos y antes de la presentación a los Ministros de una recomendación elaborada por la CGR teniendo en cuenta todos los aspectos mencionados anteriormente, se abrirá una fase de *consulta*, no vinculante, utilizando de nuevo varios mecanismos, que pueden ser puesta de manifiesto, audiencia pública u otra alternativa que considere la CGR.

Importa señalar aquí, por el carácter no vinculante de esta consulta, el concepto que si bien todo ciudadano uruguayo tiene el derecho a saber que está pasando y a opinar, el gobierno es el que decide y en definitiva asume ese compromiso. Se considera también como instancia de participación la recepción de denuncias respecto al cumplimiento de las condiciones de uso que se establecieron en el otorgamiento de la autorización.

Por último, se crea una nueva figura, el Comité Consultivo en Bioseguridad, que tendrá carácter consultivo no vinculante y el cometido de colaborar en la construcción y el seguimiento de las políticas de bioseguridad de vegetales y sus partes genéticamente modificadas. Estará integrado por instituciones públicas y privadas, la Universidad de la República y la sociedad civil. Su funcionamiento será reglamentado por el Gabinete Nacional de Bioseguridad.

Normas sobre el etiquetado

Al igual que con el tema de participación, el Grupo Interministerial priorizó en el tema etiquetado el tener en cuenta lo que pasa en el mundo con este asunto y los costos y beneficios que implica adherir a una u otra postura.

Además, siempre considero la capacidad como país de hacer cumplir la normativa y eso implica el seguimiento de las decisiones, denuncias en el caso de que no se cumplan y sanciones cuando se prueba que no se cumplen. Es tan importante como la norma, la capacidad de aplicación y de respeto por la misma que queremos y podemos hacer cumplir. A nuestro juicio, la seriedad del país no sólo se refleja en las normas que escribe sino cómo las aplica y hay muchos ejemplos de esto en el mundo; pretendemos ser un país serio y demostrarlo aplicando lo que decimos.

Por esto, la decisión fue optar por un sistema de etiquetado voluntario “Genéticamente Modificado” o “No Genéticamente Modificado”; ambos tendrán la posibilidad de diferenciarse con el requisito que pueda probarse mediante análisis del producto final la presencia o no de ADN o proteínas genéticamente modificadas.

Para tomar esta decisión también se tuvo en cuenta la cantidad de productos intermediarios de la industria que el país importa de países que no tienen normativa de etiquetado o trazabilidad de su producción. De establecer una exigencia fuerte en este sentido, pondríamos una fuerte restricción al comercio y al desarrollo de algunos sectores industriales y agroindustriales importantes para el país y sería impracticable en los hechos.